

**Justin Yifu Lin,**

**Decano del Instituto de Nueva Economía Estructural y del Instituto de Cooperación y Desarrollo Sur Sur, y Decano Honorario de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Beijing (China). Antiguo Vicepresidente Senior y Economista Jefe del Banco Mundial (2008-2012).**

## Revisión de la política industrial

El secreto mejor guardado de la política económica puede ser el hecho de que cada economía del mundo aplica, de modo intencionado o no, la política industrial. Esto es cierto no solo en el caso de los sospechosos habituales, tales como el Brasil, China, Francia y Singapur, sino también en el de Alemania, Chile, los Estados Unidos y Gran Bretaña. La noticia resulta sorprendente solo si se olvida que la política industrial se refiere en términos generales a toda decisión, reglamento o ley gubernamental que promueva el funcionamiento o el desarrollo constantes de una determinada industria. Después de todo, el desarrollo económico y el crecimiento sostenido son simplemente los resultados de la continua mejora industrial y tecnológica, un proceso que requiere la colaboración entre el sector público y el privado.

Aunque la política industrial ha tenido mala reputación en el ámbito de la economía durante mucho tiempo, la evidencia histórica muestra que todos los países que se han transformado con éxito de economías agrarias en modernas economías avanzadas — las antiguas potencias industriales de Europa Occidental y América del Norte, así como las economías recientemente industrializadas de Asia Oriental— tenían Gobiernos que desempeñaban una función proactiva de asistencia a las distintas empresas para superar los problemas de coordinación y externalidad que surgían durante su proceso de transformación estructural.

Sin embargo, lo triste es que, aunque casi todos los Gobiernos del mundo en desarrollo han intentado en algún momento de su proceso de desarrollo desempeñar esa función de facilitación, la mayoría no lo ha conseguido. La historia económica de las economías de la antigua Unión Soviética, América Latina, África e incluso Asia ha estado marcada por inversiones públicas ineficientes e intervenciones gubernamentales equivocadas que se han traducido en muchos “elefantes blancos” y distorsiones costosas.

Si se examinan detenidamente estos fracasos persistentes en las economías en desarrollo, parece que se deben principalmente a la incapacidad de los Gobiernos para elaborar criterios adecuados que permitan identificar las industrias que son apropiadas para el nivel de desarrollo de un determinado país. En efecto, la propensión de los Gobiernos a centrarse en industrias que son demasiado ambiciosas y que no son congruentes con la ventaja comparativa de un país explica ampliamente por qué sus intentos de “seleccionar ganadores” han terminado a menudo en “la selección de perdedores”. Por el contrario, como sostuve en *“Nueva economía estructural”* (Lin, 2010), los Gobiernos de los países en desarrollo que alcanzaron sus objetivos habitualmente se han centrado en industrias maduras que han tenido éxito en países con una estructura de dotación de recursos

similar a la suya y con un nivel de desarrollo no mucho más avanzado que el suyo. La principal razón es sencilla: las intervenciones de los Gobiernos destinadas a facilitar la modernización y diversificación industrial deben focalizarse en industrias con una ventaja comparativa latente determinada por su estructura de dotación de recursos, de manera que puedan beneficiarse de bajos costos de los factores de producción. De este modo, una vez que un Gobierno utiliza políticas específicas para mejorar la infraestructura física y no física necesaria para reducir los costos de transacción, las empresas privadas de las nuevas industrias pueden rápidamente volverse competitivas, tanto a nivel nacional como internacional.

En el caso de los países avanzados, la mayoría de las industrias tienden a situarse en la frontera mundial (a saber, han adoptado las innovaciones más recientes), lo que significa que la modernización requiere una innovación original. Además de medidas *ex post* como otorgar una patente a una innovación de éxito o apoyar un nuevo producto a través de la contratación, el Gobierno también puede utilizar medidas *ex ante*, por ejemplo apoyar la investigación básica necesaria para el desarrollo de nuevos productos/tecnologías o imponer un mandato para utilizar un nuevo producto como en el caso del etanol.